



Excmo. Ayuntamiento de XXX
Ilmo. Sr. Alcalde
(Salamanca)

Asunto: Tasas por la prestación de los servicios de piscinas / empadronamiento

Ilmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a V.I. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente que se tramita en esta Institución con el número **579/2022**, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, en la queja se hace alusión a que por ese Ayuntamiento se *“han aprobado y mantienen en vigor ordenanzas fiscales reguladoras de tasas por la utilización de piscinas municipales que contienen disposiciones que, ya en la tarifa general, ya en la aplicación de bonificaciones, discriminan entre ciudadanos empadronados o con algún tipo de vinculación al municipio y los que no lo están”*.

Según manifestaciones del autor de la queja, dichas normas vulneran los artículos 9.2, y 14 en relación con el 19 de la Constitución, *“pues esa diferencia está basada en el empadronamiento y no en criterios de capacidad económica”*, en que si estarían permitidos esos beneficios o esas bonificaciones.

Iniciada la investigación oportuna, se le solicitó información en relación con las cuestiones planteadas en aquella.

En atención a dicha petición de información se remitió informe en el cual se hacía constar, lo siguiente:

«- Primero: en cuanto a la vulneración del artículo 9.2 de la Constitución Española que dice : “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; no sólo no lo entendemos vulnerado, sino todo lo contrario ya que con esta medida se



están promoviendo las condiciones para que todos los ciudadanos (vecinos y visitantes) participen en la vida política, ECONÓMICA, cultural y social del municipio y contribuyan al sostenimiento de las instalaciones que utilizan en condiciones de igualdad. Los vecinos (además de con el pago de su entrada) contribuyen con el dinero municipal al mantenimiento de las instalaciones: a su acondicionamiento, limpieza, desinfección, césped, socorristas, etc... y los visitantes contribuyen a ello exclusivamente con la aportación a través del pago de la entrada.

El hecho de que los vecinos del municipio estén contribuyendo con el dinero que reporta al mismo su empadronamiento en XXX, es lo que hace que se establezca una bonificación en el pago de la entrada, dado que ellos ya han contribuido al sostenimiento de las instalaciones.

Instalaciones, que por otro lado, no existirían sin los vecinos del municipio y que en este caso tampoco los visitantes podrían disfrutar y es por ello que entendemos que el artículo 9.2 CE se cumple gracias a establecer un criterio por el cual la igualdad del individuo y del grupo en que se integra es real y efectiva, ya que de esta manera, colaboran por igual todos los ciudadanos (vecinos y visitantes) en la vida económica y social de XXX.

Ya que en caso contrario, esto es, estableciendo el mismo precio para acceder a la piscina a empadronados y no empadronados, lo que estaríamos fomentando es la desigualdad entre individuos precisamente. Y ello porque en este caso los empadronados deberían hacer doble gasto para poder disfrutar de las instalaciones y no así los no empadronados que con el pago de una simple entrada tienen las instalaciones a su disposición.

Y este sentido es el que a nuestro entender comparte nuestro Gobierno de Castilla y León al establecer éste como objetivos, y cito literalmente lo publicado por ellos donde destacamos el objetivo MEJORAR LA FISCALIDAD DIFERENCIAL FAVORABLE AL MEDIO RURAL:

“APOYO AL MEDIO RURAL

Los objetivos de la legislatura son los siguientes:

- Mejorar la fiscalidad diferencial favorable al medio rural.*
- Afrontar los retos que presenta el mundo rural: despoblación y reto demográfico.*
- Mantener los actuales beneficios fiscales y reforzar y avanzar en la aprobación de nuevas ventajas fiscales.*



- *Apoyar la natalidad, la permanencia de trabajadores, autónomos y jóvenes en los pueblos, así como ayudar a los emprendedores a poner en marcha negocios en el medio rural.*

Ventajas fiscales de Castilla y León:

- *Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas con un sistema fiscal más favorable para el medio rural.*

- *Las medidas fiscales aprobadas por la Junta de Castilla y León están dirigidas a la población media y trabajadora, al estar limitada su renta.*

Las deducciones de apoyo al medio rural son las siguientes:

- *11. Mayor deducción por nacimiento o adopción en el medio rural (incrementada en un 35%). Las familias residentes en el medio rural que tengan un hijo podrán deducirse 1.363,5 euros por el primero, 1.991,25 euros por el segundo y 3.173,85 euros por el tercero y siguientes.*

- *12. Deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual: los menores de 36 años podrán deducirse un 15% de las cantidades satisfechas, con un límite máximo de 1.356 euros anuales.*

- *13. Mayor deducción en el IRPF por arrendamiento de la vivienda habitual: los menores de 36 años podrán deducirse un 25% del alquiler con un límite de 612 euros.*

- *14. Deducción en el IRPF por cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas rurales destinadas a su alquiler. Podrá deducirse el 15% de las cantidades invertidas, con un máximo de 20.000 euros”.*

No podemos pretender acabar o mejorar el problema de la despoblación cuando se grava el hecho de vivir en un municipio donde debes hacer doble gasto para poder utilizar unas instalaciones municipales cómo es el gasto que hacen los vecinos para acondicionar las instalaciones y el gasto para su acceso, en “favorecimiento” de los visitantes que solamente hacen el gasto para su acceso y que se encuentran cuando quieren y deciden usarlas, unas instalaciones en perfecto estado para su uso gracias al gasto realizado por los vecinos.

- Segundo: En cuanto a la utilización del criterio de empadronamiento en vez del criterio de capacidad económica; decirles que al igual que la Junta de Castilla y León deberá utilizar ese criterio a la hora de “mejorar la fiscalidad diferencial favorable al medio rural” y para el cumplimiento del resto de sus objetivos, ya que no existe otro modo de certificar la vecindad; el Ayuntamiento de XXX ha establecido este criterio ya que la financiación de este municipio (y por tanto la financiación del acondicionamiento de las instalaciones de las piscinas) como bien saben ustedes viene dada



fundamentalmente por la participación en tributos del Estado que se distribuye en función del número de habitantes en cada municipio; así como por subvenciones, que se otorgan mayoritariamente en función del número de habitantes y este número de habitantes, como saben perfectamente, se determina por el número de empadronados.

- Tercero: En cuanto a los artículos 14 y 19 CE; en ningún momento los entendemos vulnerados, ya que en ningún momento se les ha prohibido el acceso ni la libre circulación por las instalaciones y la bonificación en el precio de la entrada para acceder a las instalaciones a los vecinos, no limita en ningún caso el acceso y la libre circulación al resto de ciudadanos a los que se les está permitido el uso y disfrute de toda la instalación en condiciones de total igualdad que a los vecinos.

En ningún caso el aforo limitado de las instalaciones discrimina entre empadronados y no empadronados, ni se prohíbe la entrada a no empadronados.

*- Cuarto: Para concluir, dejar claro que este Ayuntamiento simplemente ha establecido **un criterio puro y exclusivamente económico** para establecer el precio de las entradas en las piscinas, ya que lo que se pretende es no gravar doblemente a los vecinos por la utilización de las piscinas (una vez a través del dinero municipal para su acondicionamiento y otra vez con el pago de la entrada); es por ello por lo que se establece una “bonificación” al haber contribuido económicamente ya a la existencia y mantenimiento de las instalaciones; **si bien la única manera de certificar ese criterio económico es mediante el empadronamiento.**»*

A la vista de lo informado y acreditado en el expediente, procedemos a formular las siguientes consideraciones para fundamentar jurídicamente el contenido de la presente Resolución.

La Ordenanza fiscal nº 15, aprobada por ese Ayuntamiento, reguladora de la Tasa por utilización de piscinas municipales, instalaciones deportivas y análogas, establece en su artículo 4 diferencias que discriminan entre ciudadanos empadronados o con algún tipo de vinculación al municipio y los que no lo están, para el supuesto del uso de la piscina municipal.

Esta Procuraduría se ha pronunciado en numerosas ocasiones considerando que no resulta ajustada a derecho la diferenciación entre personas empadronadas y no empadronadas en relación a los tributos municipales, y ello con base en los siguientes fundamentos:

El artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que señala que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados



internacionales. No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley.

Por su parte, la Ley 8/1989, de 13 de abril, que regula el régimen jurídico de las tasas y precios públicos, en su artículo 8 establece el principio de capacidad económica, de forma que en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas, sin perjuicio de lo cual, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales -art. 18-.

Así mismo, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 57 faculta a los ayuntamientos para establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, potestad que se concreta en este caso en el artículo 20.4 de la misma norma cuando prevé: “(...), *las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local (...)*”.

Ahora bien, el artículo 24.2 del mismo cuerpo legal, al regular la cuota tributaria establece que, en general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. El párrafo 4 de dicho artículo prevé que para la determinación de la cuantía de las tasas “*podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas*”.

De la anterior normativa obtenemos como primera conclusión que debemos de partir del principio de igualdad tarifaria de cada servicio público municipal para todos los que reciben las mismas prestaciones.

Dicho principio viene también consagrado en el artículo 150 del Decreto de 17 de junio 1955, que aprobó el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, si bien prevé en su apartado segundo que, no obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente débiles.

El Tribunal Supremo, con fecha 12 de julio de 2006, se pronunció en un supuesto similar al presente (si bien se trataba de la tasa por el suministro de agua potable) poniendo de manifiesto que la diferencia de trato que provocaba la modificación de la tarifa en función del empadronamiento no es un criterio jurídicamente asumible, ni



conforme a derecho toda vez que *“el art. 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece el principio de igualdad de los usuarios ante las tarifas de los servicios. Es cierto que el apartado dos de dicho precepto permite fijar tarifas reducidas o bonificadas, en beneficio de sectores personales económicamente débiles, pero en este uso no se aprobó subvención alguna en materia de tarifas de agua, sino que se estableció la tarifa de consumo doméstico para las viviendas o alojamientos de carácter habitual y permanente en los casos en que los titulares de los contratos figurasen empadronados en el municipio, con independencia de que fueran o no titulares de una o más viviendas, incluyendo, en cambio, dentro del consumo industrial no sólo el servicio prestado a cualquier actividad industrial, comercial, profesional o artística, sino además el prestado a viviendas destinadas a segunda residencia cuyos titulares no figurasen empadronados en el Municipio, diferencia de trato totalmente artificiosa e injustificada, por no venir fundada en un criterio objetivo y razonable de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados”*.

También el Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de mayo de 2000, interpretó este artículo en conexión con el artículo 14 de la Constitución señalando que *“el artículo 150 RSCL requiere para que el término comparativo sea válido que se den las mismas circunstancias y, de otra, el derecho fundamental lo que prohíbe es la discriminación consistente en una diferencia de trato que no esté fundada en un criterio jurídicamente asumible”*. Por tanto la desigualdad de trato ante una misma situación exige una justificación objetiva y razonable, (SSTC 8/1986, de 21 de enero, 19/1987, de 17 de febrero, 150/1990, de 4 de octubre y 54/1993, de 15 de febrero).

En este mismo, sentido la STS de 14 de noviembre de 2012 viene a admitir los planteamientos de la Sala de instancia que considera que la Corporación municipal carece de facultades para establecer exenciones y bonificaciones tributarias en base al principio de reserva de Ley, y que el simple hecho de empadronarse en un municipio determinado no puede constituir objeto de subvención alguna, por lo que más bien hay que calificarlo como de una exención o bonificación encubierta.

Concretamente, el Tribunal Constitucional ha declarado que el derecho a la igualdad ante la Ley impone al Legislador y a quienes aplican la Ley la obligación de dispensar un mismo trato a quienes se encuentren en situaciones jurídicas equiparables, con prohibición de toda discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable; de modo que *“para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse no discriminatorias resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente, por ello, una razonable relación de proporcionalidad entre los*



medios empleados y la finalidad perseguida, y dejando en definitiva al Legislador con carácter general la apreciación de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente” (STC 75/83). Añadiéndose que “las diversificaciones normativas son conformes a la igualdad, en suma, cuando, además, las normas de las que la diferencia nace muestran una estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad, al fin perseguido. Tan contraria a la igualdad es, por tanto, la norma que diversifica por un mero voluntarismo selectivo como aquella otra que, atendiendo a la consecución de un fin legítimo, configura un supuesto de hecho, o las consecuencias jurídicas que se le imputan, en desproporción patente con aquel fin, o sin atención alguna a esa necesaria relación de proporcionalidad” (STC 209/88).

Considerando, pues, el principio de igualdad tarifaria de los servicios públicos municipales para todos los que reciben las mismas prestaciones -modulado, en su caso, por el principio de capacidad económica-, y sometido, en el ámbito de los beneficios fiscales, bonificaciones y exenciones a lo expresamente previsto en las normas con rango de ley, no cabe sino concluir que en el presente caso la diferenciación en la Ordenanza de cuotas tributarias con base en el empadronamiento de los usuarios de las piscinas, no viene ajustada a las previsiones legales, en tanto que implica la lesión del contenido esencial de un derecho susceptible de amparo constitucional, esto es, el derecho de igualdad ante la Ley, previsto en el artículo 14 de la Constitución Española.

En esta línea jurisprudencial, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 18 de marzo de 2002, con amparo en la doctrina del Tribunal Constitucional que declara que el derecho a la igualdad ante la Ley impone al legislador y a los aplicadores de la Ley la obligación de dispensar un mismo trato a quienes se encuentren en situaciones jurídicas equiparables, con prohibición de toda discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable, estima el recurso presentado contra el Ayuntamiento de Val de Santo Domingo (Toledo) en materia de tasa por servicios funerarios, acordando la devolución al recurrente del ingreso indebido y declarando la nulidad de pleno derecho del precepto de la ordenanza que fija tarifas distintas para las personas empadronadas y no empadronadas en el municipio con la siguiente motivación jurídica (FJ 5º y 6º):

“Y en este sentido la conclusión a que nos conduce el examen de la normativa anterior, en relación con los presupuestos fácticos del caso concreto, es la de estimar el recurso contencioso-administrativo entablado contra el acto presunto del Ayuntamiento demandado, por incurrir la regulación de la Ordenanza Municipal (en concreto, su art. 6) en la nulidad absoluta, radical y de pleno derecho del art. 62.1.a) de la Ley 30/92, de 26 Nov., de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde la constatación de que lesiona el contenido esencial de un



derecho susceptible de amparo constitucional, el de igualdad ante la ley del art. 14 de nuestra Ley de leyes.

Efectivamente, no encontramos - ya sabemos que tampoco la ofrece la Corporación Local demandada - explicación alguna razonable para que un criterio de determinación de la cuota tributaria pueda ser el hecho de que estuviera empadronada o no en la localidad la persona que acaba de fallecer; más bien parece, desde luego, que se quiere primar (beneficio fiscal sin cobertura legal alguna que nos conste) el dato del empadronamiento en el pueblo, que ni siquiera hablamos de la residencia efectiva en el mismo, o de la estancia real durante una serie de años. Ello no puede amparar una regulación como la descrita, sin que nos consten circunstancias excepcionales de tipo alguno, que pudieran salvar la presunción de validez de los actos administrativos (art. 57.1 de la ley 30/92); ésta, sin embargo, se ve ampliamente desvirtuada desde la consideración de que el dato solo del empadronamiento anterior no puede fundamentar una discriminación en materia tributaria como la examinada, que atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. Sin que, para terminar, revele el empadronamiento una significación especial en cuanto a una mayor o menor capacidad económica -que sí podría ser un criterio válido, como acabamos de ver- ni desde luego tenga nada que ver con el coste real o previsible del servicio prestado por la Corporación, idea rectora en la figura jurídico-tributaria de la tasa.

Ello nos mueve a (...) declarar la nulidad de pleno derecho del precepto de la Ordenanza tan citado”.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 12 de abril de 2002, anuló la Ordenanza del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por la que se establecía un precio público por la prestación del servicio de matrimonio civil fijando una cuota doble para los contrayentes no empadronados respecto a los empadronados, por considerar que siendo el principio de igualdad el que inspira también el sistema tributario, las diferencias de tarifas no pueden implicar discriminación por razón de la condición de empadronamiento, y ello porque la discriminación solo estaría justificada en el principio de capacidad económica de quienes han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Más recientemente, y por el mismo supuesto planteado en la presente queja, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 29 de abril de 2013, ha anulado la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicios por el patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Siero, en cuanto establece cuotas distintas de las tasas para usuarios de las instalaciones deportivas empadronados y no empadronados, con esta argumentación (FJ 4º):



“(…) teniendo en cuenta que el principio de igualdad es el que impera el sistema tributario, puesto que desde el art. 1.1 hasta el 139.1, pasando por los art. 14 y 92 CE, la conclusión a la que necesariamente se ha de llegar es la de que las diferencias de trato no pueden implicar discriminación por razón de la condición de empadronamiento resultando ello únicamente factible en el principio de capacidad económica de quienes han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, como señala el art. 31.1 y 2 de la Constitución, cosa ésta que no cabe justificar, tal y como se pretende, ni en el déficit del servicio ni en el hecho de abonar los vecinos de Siero los correspondientes impuestos municipales, por no guardar ello relación directa con el referido criterio de capacidad económica; es por todo ello, unido a la circunstancia de que, conforme dispone el art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los tributos locales no pueden reconocerse más beneficios fiscales en las correspondientes Ordenanzas que los expresamente previstos por la Ley, lo que aquí no acontece, decimos que, por todo ello, procede estimar el presente recurso y ello por entender, finalmente, que resulta de aplicación la doctrina que se contiene en la importante sentencia del Tribunal Supremo de 12 de agosto de 2006, citada por la demandante”.

El Defensor del Pueblo mantiene esa misma posición jurídica. A modo de ejemplo, con fecha 10/02/2015, dirigió una resolución al Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) solicitando la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de los precios públicos por prestación de servicios en virtud de la cual los empadronados en ese municipio pagaban menos por la utilización de la piscina. La Defensoría fundamentaba su resolución con los siguientes argumentos:

“(…) El contenido del epígrafe G del art. 3º de la Ordenanza nº 1 reguladora de los precios públicos por prestación de servicios, por el que los empadronados en ese Municipio pagan menos por la utilización de la piscina, no es acorde con lo dispuesto en el art. 9 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004) y en el art. 150.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955. Ambos preceptos establecen el principio básico de igualdad de todos los usuarios en las tarifas de los servicios, salvo reducciones que atiendan únicamente a la capacidad económica, como prevé el apartado 2 del citado art. 9.

2ª En principio, todos los usuarios tienen que pagar la misma cantidad por los servicios municipales que utilizan, consecuencia de la igualdad proclamada en el art. 14 en conexión con el 31.1 de la Constitución. Ello no significa uniformidad absoluta, pues se admite el trato diferente -como tarifas reducidas o bonificadas- cuando concurren circunstancias que están legalmente previstas y a favor de sectores económicamente desfavorecidos.



Lo que no cabe es el trato diferente entre personas, categorías o grupos que no se puedan encuadrar en alguno de esos supuestos legales ya que ello daría lugar a una discriminación prohibida por el art. 14 de la Constitución. Cuando algún ciudadano tiene que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio, entonces se vulnera el principio de igualdad (art. 14 en relación con el 19 de la Constitución), pues esa diferenciación está basada en el empadronamiento y no en criterios de capacidad económica.

3ª Con la práctica de cobrar más a los que no están empadronados, se olvida que los poderes públicos deben facilitar y no obstaculizar el ejercicio de las libertades de circulación de personas, bienes y servicios así como las relaciones entre los individuos y grupos sociales en que se integran (art. 9 de la Constitución).

Igualmente se debe tener en cuenta que parte de los ingresos de esa Administración local provienen de los tributos pagados por personas no residentes en el Municipio (por tener vivienda, por realizar ahí sus negocios o los meros visitantes) así como de las participaciones de esa Entidad local en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otros ingresos. Todos estos ingresos también proceden de los tributos pagados por ciudadanos que no residen en ese Municipio.

(...) Esta Institución entiende que si ese Ayuntamiento considera que los residentes deben contar con una preferencia en el uso de los servicios y actividades municipales, ya que son quienes más contribuyen a su sostenimiento, se debería estudiar otra alternativa que fuera conforme con la ley. La solución no puede alcanzarse a través de la diferenciación tributaria basada en el lugar de empadronamiento. “

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, desde otro punto de vista y con base en la necesidad de que los beneficios fiscales vengan previstos en una norma con rango de Ley, ha sugerido (ref. queja 040149) al Ayuntamiento de Burriana (Castellón) la conveniencia de modificar la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios de actividades deportivas y uso de instalaciones, al objeto de que en la determinación de la cuantía de las tasas no se tenga en cuenta el criterio del empadronamiento en Burriana y sí, en cambio, criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.

La Resolución 198/2007, de 25 de octubre, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, admite que los recursos económicos de las entidades locales se nutren principalmente de los tributos, tasas y precios públicos que periódicamente satisfacen los vecinos empadronados, pero ello no es motivo suficiente para establecer una diferencia en el precio de los abonos. En este sentido, el Defensor navarro apreció, una vez valorada la información facilitada por el Ayuntamiento, que no se acreditó una circunstancia o dato adicional de los que se pudiera deducir un fundamento con relevancia jurídica suficiente legitimador de un tratamiento distinto para



empadronados y no empadronados. Por ello, se recomendó al Ayuntamiento objeto de la queja que procediera a revisar la Ordenanza municipal reguladora de las tasas por utilización de las instalaciones deportivas municipales, de manera que no estableciese diferencias de trato a los usuarios de dichos servicios que impliquen discriminaciones no justificadas.

Finalmente, conviene destacar que el Justicia de Aragón, precisamente en la Sugerencia DI-1178/2010-5, abunda en la misma línea al señalar que *“De esta manera, en el caso de que la prestación económica exigida al ciudadano por los servicios municipales prestados se configure como una tasa -lo que aquí ocurre en el supuesto del pago de nichos, regulado dentro de la Ordenanza Fiscal de Cementerios cuyo texto se ha transcrito en los Antecedentes de esta resolución-, ya anticipamos que no existe apoyo legal alguno que justifique una diferenciación de las tarifas exigidas por la prestación del servicio en atención a la circunstancia del empadronamiento o no del sujeto tributario obligado a su pago”*.

No podemos obviar tampoco, que cuando el Servicio de Asesoramiento Local de una Diputación Provincial, en este caso vamos a citar la de Valladolid, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, sostiene, en relación con la atribución de ventajas económicas a los empadronados que *“son varios los pronunciamientos jurisprudenciales que se han encontrado en relación con la imposibilidad de establecer un trato diferente para los empadronados y los no empadronados en relación con la cuantía de las tasas. Estos pronunciamientos encuentran discriminatorio el atribuir ventajas económicas a unos usuarios sí y a otros no con la única base de que aparezcan inscritos en el padrón municipal, entienden que esta desigualdad de trato no es objetiva, ni razonable y que va en contra del principio de igualdad, así lo ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1997 y de 12 de julio de 2006”*.

El informe jurídico manifiesta lo siguiente: *“En conclusión, no es posible otorgar ventajas económicas a los empadronados respecto de los no empadronados, de acuerdo con el art. 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la tarifa de cada servicio será igual para todos los usuarios excepto que se establezcan tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente más débiles (jubilados, menores, ...), lo contrario implicaría un trato discriminatorio, pues la distinción entre empadronados y no empadronados no obedece a criterios económicos. Esta desigualdad de trato no sería objetiva ni razonable”*.

A modo de conclusión, el empadronamiento en el municipio de XXX, por sí solo, no es una circunstancia con relevancia jurídica suficiente para establecer normativamente un trato diferenciador. Por tanto, siendo contrario al ordenamiento jurídico el artículo 4 de la Ordenanza fiscal nº 15, reguladora de la Tasa por utilización de piscinas municipales, instalaciones deportivas y análogas, debe ser considerado nulo de pleno derecho, sin que



puedan tener acogida y ser considerados los argumentos expuestos razonadamente por el Sr. Alcalde en su informe, al pretender justificar este trato diferenciado en que la Comunidad Autónoma también contempla una serie de deducciones en el IRPF de apoyo al medio rural, dado que en este caso, es el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que se basa y articula en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el que permite este tratamiento fiscal diferenciado, cuando establece en su artículo 46 que estas pueden asumir, entre otras competencias normativas, la relativa a la aprobación de deducciones aplicables sobre la cuota íntegra autonómica por:

Circunstancias personales y familiares.

Inversiones no empresariales.

Aplicación de renta.

Además de la aprobación de las deducciones autonómicas, las competencias normativas de las Comunidades Autónomas abarcan también la determinación de las siguientes materias relacionadas con las mismas:

La justificación exigible para poder practicarlas.

Los límites de deducción.

Su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial.

Haciendo uso de estas competencias normativas asumidas, las distintas Comunidades Autónomas de régimen común, entre las que se encuentra la de Castilla y León, han aprobado deducciones autonómicas que pueden aplicar en sus declaraciones del IRPF exclusivamente los contribuyentes que durante dicho ejercicio hubieran tenido la residencia habitual en sus respectivos territorios.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

Que por el Ayuntamiento de XXX se proceda a modificar el artículo 4 de la Ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la Tasa por utilización de piscinas municipales, instalaciones deportivas y análogas, en el sentido de fijar una tarifa única y común para todos los usuarios de los servicios prestados, con independencia de su lugar de empadronamiento, dejando a salvo la posibilidad de modular su importe en función de la concurrencia de circunstancias ajustadas a lo previsto en la legislación, en la forma en la que se ha dado cuenta en el cuerpo de esta Resolución.



PROCURADOR DEL COMÚN
DE CASTILLA Y LEÓN

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López